

TRIBUNALES

11 Mayo 2024



Para que cuente,
¡Vota!

Van 237 denuncias por delitos electorales

Marzo de 2024 se coloca con el mayor número, con 101; la FGJ ha abierto carpetas de investigación por amenazas, compra del voto, entre otras

KEVIN RUIZ

—metropoli@eluniversal.com.mx

De septiembre de 2023 a marzo de 2024, fecha en que inició el proceso electoral, a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina han ingresado 237 denuncias, con las que abrieron el mismo número de carpetas de investigación por delitos electorales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al hacer una revisión de los datos se halló que marzo de 2024 se coloca como el mes con más denuncias por delitos electorales con 101, cuando en marzo de 2023, sólo hubo dos.

Enero de este año registró 41 denuncias y febrero, 58, según arroja el último corte.

Con el inicio del proceso electoral en septiembre de 2023 se registraron 19 denuncias; en octubre, siete; en noviembre, cinco y en diciembre, seis.

Amenazas, agresiones, presunta

compra del voto, retiro de propaganda electoral y condicionamiento de servicios por un voto, son algunas de las denuncias que se han interpuesto en la fiscalía capitalina durante este proceso, de acuerdo con una revisión realizada con documentos oficiales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

EL UNIVERSAL revisó denuncias interpuestas en diferentes agencias desconcentradas de la FGJ por delitos electorales diversos, en los que se halló este tipo de *modus operandi*, todos catalogados en el marco del proceso electoral.

Por ejemplo, el pasado 8 de mayo, Pedro Espejel García, apoderado legal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, acudió a denunciar la aparición de propaganda en las instalaciones del candidato de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada.

Se abrió el expediente CI-FI-CUH/STCMP/UI-2 S/D/0070/05-2024, en el que quedó asentado que diversos operadores del Centro Estratégico del Metro reporta-



El retiro de propaganda es una de las denuncias por las que la fiscalía capitalina ha iniciado investigaciones en este proceso electoral.

CRECEN ACUSACIONES

Desde que inició el proceso en septiembre de 2023, las quejas han ido en aumento.

41

DENUNCIAS

recibió en enero la FGJ por delitos electorales.

58

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

abrió la fiscalía capitalina por el mismo número de denuncias.

ron dicha propaganda en vagones y andenes.

El 4 de mayo se abrió el expediente CI-FIAO/UAT-AO-4/UI-1S/D/02844/05-2024 en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Xavier González Zirió, presentó su denuncia en contra de Juan Carlos Rocha, coordinador territorial de campaña de Morena, por agresiones sobre la calle Prolongación San Antonio frente al número 413, en la colonia Carola.

De acuerdo con la narración hecha ante el Ministerio Público, González Zirió caminaba en compañía de su equipo de

brigada y coordinadora de campaña realizando volanteo, cuando un grupo de 40 personas presuntamente pertenecientes al partido Morena comenzaron a empujarlos e insultar, diciéndoles que “les iban a quemar su casa de campaña” y “amenazándolos de muerte”.

Según el diputado, identificó a Juan Carlos Rocha Cruz, a quien señaló de ser servidor público y laborar en la Secretaría de Bienestar y, a su vez, funge como coordinador de la campaña política de Javier López Cazarín.

De oficio, también la FGJ ha abierto denuncias como la del pasado 25 de abril en la alcaldía Milpa Alta, en la avenida Tlaxcala esquina Jalisco, Pueblo de Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

Ahí la Fiscalía General de Justicia señaló a nueve sujetos, entre ellos, Ricardo Vilchis Alvarado, representante del PRI ante la Junta Distrital, Alejandro Belmont Pachec, representante del PRD ante la Junta Distrital, y Javier Pastel Jiménez, representante del PAN ante la Junta Distrital.

Se refiere que los sujetos iban a bordo de una camioneta Urvan color morada sin placas de circulación y se encontraban “retirando propaganda de la coalición política Va por la CDMX”, conformada por PRI, PAN y PRD, de los candidatos políticos Santiago Taboada, Jorge Alvarado y Mariana Moguel. ●

De 35 mil 345 carpetas abiertas entre 2012 y 2024, 21 mil corresponden al fuero federal; Edomex, CdMx y Oaxaca, con más expedientes en el ámbito local

Transparencia

Por delitos electorales, solo 39 sentencias en doce años

Reportaje

RAFAEL MONTES
CIUDAD DE MÉXICO

En los últimos 12 años, las fiscalías de delitos electorales de los estados y la federal han iniciado, al menos, 35 mil 345 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Sin embargo, los poderes judiciales emitieron, entre 2012 y 2024, solo 39 sentencias condenatorias.

De las más de 35 mil investigaciones, 21 mil corresponden al fuero federal.

En el ámbito local, la entidad con más expedientes abiertos es el Estado de México, con al menos 2 mil 323, seguido de Ciudad de México, con mil 427, y Oaxaca, con mil 232.

MILENIO preguntó, vía transparencia, a las 33 fiscalías electorales y a los 33 poderes judiciales del país cuántos delitos se habían registrado y cuáles habían sido sus condenas en dicho periodo.

Las respuestas revelan que la

justicia penal electoral, en realidad, no castiga estos ilícitos.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, vigente desde 2014, incluye en su catálogo más de 70 conductas sancionables, las cuales, sin embargo, parecen ser letra muerta.

Algunos de esos delitos son provocar temor o intimidación en el electorado, solicitar votos a cambio de dinero u otra contraprestación o mediante violencia o amenaza apoderarse, destruir y alterar materiales electorales, entre otros.

Se trata de ilícitos por hechos que se han presentado en la misma jornada electoral, como la alerta emitida el 6 de junio de 2021 de que en dos casillas del municipio de La Huacana, Michoacán, supuestos integrantes de la delincuencia organizada estaban obligando a los ciudadanos a votar masivamente.

Más temprano, antes de instalar una casilla, *levantaron* a una persona y la obligaron a tachar todas las boletas.

En esa jornada hubo elecciones en todo el país: se eligieron

más de 2 mil 500 cargos, incluidos 15 gobernadores y 500 legisladores federales.

Fue un día difícil; pasadas las 4 de la tarde, en la casilla de la supermanzana 518 de Cancún, Quintana Roo, se escucharon disparos y los votantes salieron corriendo o se tiraron al piso.

A esos hechos se sumó otro a unos minutos del fin de la jornada: 20 hombres rociaron gasolina en una escuela de Tulum, donde la casilla 924, provocando la desbandada de la gente ante la amenaza.

Tres años antes, el 3 de julio de 2018, cuando se votó también por la Presidencia, se registraron episodios similares. En Puebla, por ejemplo, capacitadores electorales, entre ellos, dos embarazadas, fueron secuestrados.

Reina la impunidad

De las 39 sentencias condenatorias reportadas, 26 corresponden a delitos electorales federales y fueron dictadas por el Poder Judicial de la Federación.

Las otras 13 se expidieron en dos entidades: 10 en el Tribunal

La dificultad de aportar evidencias suficientes para armar casos sólidos explica estas cifras, según expertos

Superior de Justicia de Ciudad de México y tres en el Poder Judicial de Sonora.

Eso significa que, en dos sexenios, 30 poderes judiciales locales no emitieron una sola sentencia por delitos electorales.

“Son datos que me parecen escandalosos, a reserva de hacer una investigación cualitativa, es decir, de tener acceso a las carpetas y a las denuncias; pero por los puros números, me parece escandaloso”, opina Salvador Romero, especialista en derecho electoral y en transparencia y ex secretario ejecutivo en el Tribunal Electoral.

De las más de 35 mil investigaciones, la mayoría se atoró en el camino. Solo 19.58 por ciento, es

decir, 6 mil 922, se judicializó, pero no se tradujo en condenas.

El resto cayó en la inacción. En 30.5 por ciento de los casos, es decir, 10 mil 802, se decidió el no ejercicio de la acción penal; mil 232 siguen en integración, 724 se archivaron, 339 se dejaron de investigar y el resto se desechó por diversas razones.

Los números podrían ser mayores, pero siete fiscalías electorales y ocho poderes judiciales —una cuarta parte del país— no atendieron las solicitudes realizadas por MILENIO.

Ante la falta de transparencia, algunas cifras sobre carpetas de investigación fueron obtenidas de los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin pruebas no hay castigo

Para Salvador Romero, uno de los principales problemas que puede explicar estos datos es la dificultad de aportar pruebas suficientes para que las fiscalías armen casos sólidos.

“Si vas a condenar a alguien, no puede quedarle ninguna duda al juez de que los hechos sucedieron y que constituyen un delito, pero, a veces, ni siquiera se pueden comprobar y se pretende hacerlo con una foto o un video.

“Debes de contar con más elementos, y estoy seguro de que la mayoría de las denuncias que se presentan en materia de delitos electorales se soportan en una foto, un video o en el dicho de alguien”, comenta Romero.

De las 26 sentencias condenatorias de jueces federales, las más severas se dictaron en cinco casos, en los que se impusieron penas de tres años y cuatro meses de prisión.

En cuatro de ellos se castigó la alteración del Registro Federal de Electores y en el restante que

Casos en entidades

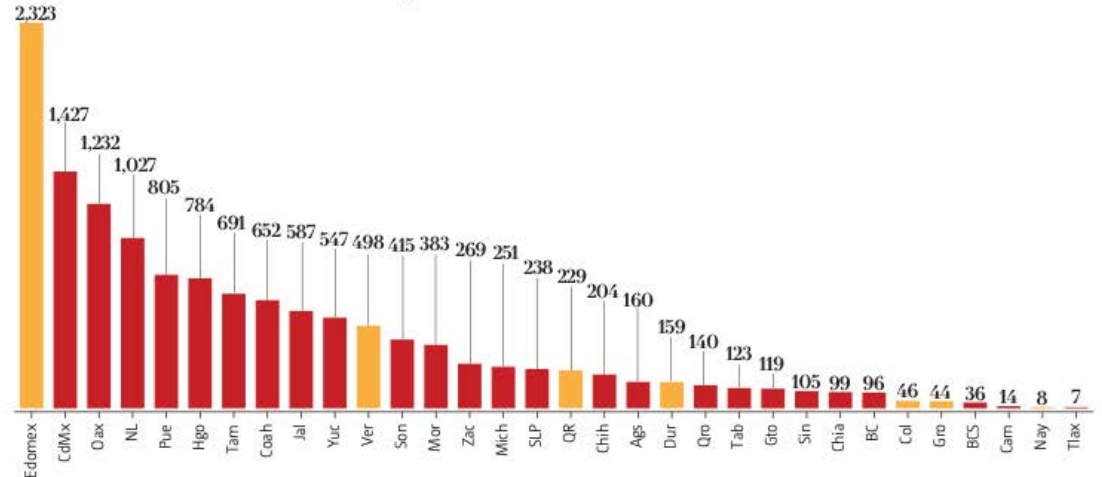
El Estado de México lidera en carpeta de investigación, segundo por CdMx y Oaxaca, mientras Tlaxcala es donde menos denuncias hay

● Carpetas de investigación



POR ENTIDAD

● Fiscalías estatales ● Datos del Secretariado Ejecutivo



SENTENCIAS CONDENATORIAS



• FUENTE: Fiscalías locales y Secretariado Ejecutivo • INFORMACIÓN: Rafael Montes • GRÁFICO: Juan Carlos Fleicer

un funcionario partidista ocultó o negó información a la autoridad electoral; ninguna relacionada con los hechos violentos que suelen exhibirse.

En el ámbito local, de las 10 sentencias de jueces de Ciudad de México, la más severa fue la prisión por cuatro años y seis meses por la utilización ilícita de fondos, bienes o servicios públicos en actos de campaña.

A esas condenas podrían sumarse 13 más —12 reportadas

por la fiscalía electoral de Nuevo León y una por la de Chiapas—; sin embargo, los poderes judiciales de esos estados reportaron cero sentencias, dato que no coincide con las dependencias.

La información entregada a MILENIO también revela la opacidad que impera en muchas instituciones; por ejemplo, las fiscalías de Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz no contestaron las solicitudes.

El Poder Judicial de Tamaulipas tampoco respondió, mientras que los del Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz se declararon incompetentes.

De acuerdo con la ley, las autoridades estatales deberán investigar, perseguir, procesar y sancionar dichos ilícitos cuando no tengan conexión con delitos federales o cuando no participe el IINE en la organización de la elección local. ■